

ABSTRACTO

URUGUAY

I. DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA

Título del Proyecto:	Marco Institucional y Regulatorio de los Servicios de Interés Público y de Comunicaciones.		
Número del Proyecto	TC-0010036		
Beneficiario y Ejecutor:	República Oriental del Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)		
Financiamiento:	FOMIN	US\$	1.200.000
	Local	US\$	800.000
	Total	US\$	2.000.000
Fecha de Solicitud del Proyecto:	Octubre 2000		

II. ANTECEDENTES

A. Aspectos Generales

- 2.1 El Gobierno de la República Oriental del Uruguay viene avanzando en un proceso de reforma y desregulación de sectores claves de su economía. Este proceso, iniciado desde hace más de dos décadas, se ha profundizado en los últimos años con medidas tendientes a la modernización de las empresas públicas, asociación con el sector privado y desmonopolización de varios sectores, tales como energía y telecomunicaciones. La nueva Administración, que asumió en marzo de este año, ha iniciado medidas tendientes a acelerar el proceso de reformas para promover la inversión y eficiencia en la provisión de servicios públicos.
- 2.2 En este contexto, el Gobierno Uruguayo está impulsando la instrumentación de los nuevos marcos regulatorios sectoriales y la consolidación de las agencias reguladoras en dos entidades autónomas; una para comunicaciones, y otra para energía y otros servicios públicos. En particular, como mensaje complementario al Proyecto del Ley de Presupuesto Quinquenal 2000-2004, el Poder Ejecutivo estaría enviando al Poder Legislativo en el mes de noviembre, una propuesta de creación de dos Unidades Reguladoras, de los Servicios de Interés Público (URSIP) y de Comunicaciones (URSEC), que apunta a: (i) la ampliación en el acceso de los servicios; (ii) el fomento del nivel óptimo de las inversiones; (iii) la protección de los derechos de los consumidores; (iv) la promoción de la libre competencia en la prestación; y (v) la aplicación de tarifas justas y razonables, que permitan elevar la competitividad del país. El alcance de este

proyecto legal comprenderá el suministro de energía eléctrica, gas, combustibles derivados del petróleo, agua potable y saneamiento, telecomunicaciones y servicios postales. Asimismo estas dos entidades reguladoras contarían con autonomía técnica y financiera.

- 2.3 Esta Cooperación Técnica (CT) contribuirá a la implementación de un esquema regulatorio moderno para los servicios públicos, que fomente la inversión, y el funcionamiento eficiente de los distintos sectores y que sea consistente con el proceso de integración regional del Mercosur. Además, la CT apoyará la creación y consolidación de la URSEC y de la URSIP. A continuación se describe la situación de los sectores que se beneficiarían de la asistencia.

B. Comunicaciones

- 2.4 Uruguay presenta el desarrollo del sector comunicaciones más importante de toda América Latina y el Caribe, con indicadores similares a países desarrollados. Cabe destacar, por ejemplo, que el índice de penetración de TV cable supera el 50% de los hogares, además de contar 95% con conexión telefónica (40 teléfonos cada 100 personas). Asimismo, 30% de los hogares poseen teléfono celular, contabilizándose más del 10% de los hogares con conexión a Internet (la más alta tasa de Latinoamérica) y con un equipamiento de computadoras en 40% de los mismos. Otro indicador de avance tecnológico del sector, es el hecho de que Uruguay fue en 1997 el cuarto país del mundo en lograr el 100% de digitalización de la telefonía, siendo el único de la región que cuenta con una red interna de fibra óptica que permite la conexión de Internet a nivel del país sin necesidad de salir al exterior para las comunicaciones internas, lo que repercute en un bajo costo de navegación y una comunicación muy accesible.
- 2.5 A esto se agrega que Uruguay es uno de los dos países latinoamericanos con grado de inversión otorgado por las tres principales agencias calificadoras del mundo, y que posee uno de los mayores índices de capital humano de la Región, lo que permite vislumbrar el gran potencial para el desarrollo de proyectos de inversión relacionados a la economía de la información. Sin embargo, para que este potencial se concrete, es necesario un funcionamiento eficiente del mercado de comunicaciones, particularmente de las telecomunicaciones. El nuevo Gobierno ha tomado a este tema como uno de los pilares de la administración. De hecho se ha creado un Comité Nacional para la Sociedad de la Información (CNSI), adscripto a la Presidencia de la República, donde participan en forma conjunta el Estado, las universidades y el sector privado que tienen como una de sus funciones básicas promover el desarrollo de un mercado eficiente de las telecomunicaciones e Internet.
- 2.6 El compromiso de las autoridades del país con el sector de telecomunicaciones se ha puesto de manifiesto también con otras iniciativas recientes como la aprobación de una resolución que reglamenta la instalación y operación de estaciones terrenas para la prestación comercial de servicios de telecomunicaciones de carácter nacional e internacional en el servicio fijo por satélite de bandas C y KU. Sobre la base de este reglamento, varias empresas internacionales han comenzado a instalarse en el Uruguay y se proyecta un importante flujo de inversión para los próximos años. Asimismo en el

correr del año se han autorizado, en base de una licitación desarrollada en 1999, la autorización de más de 8 empresas en el área de transmisión de datos de forma inalámbrica (LMDS). En este sentido empresas como Telefónica, Diveo, Bell South, Qualcomm y otras han integrado empresas que han comenzado a operar en la segunda mitad de 2000. Del mismo modo, varias empresas han demostrado interés en importantes inversiones de conexión internacional de banda ancha mediante fibra óptica, destacándose el anuncio reciente de Telefónica que instalaría en Montevideo la sede para América Latina de Energía, empresa propietaria de la conexión con fibra óptica a través del océano y que se ramificaría al resto de América a partir de Uruguay.

2.7 En los últimos años se han tomado medidas claves para la apertura del sector comunicaciones:

- a. En lo que respecta a los servicios postales, el artículo 1° de la Carta Orgánica de la Administración Nacional de Correos (ANC), aprobada por el artículo 747 de la Ley N° 16.736 del 5 de enero de 1996, crea este ente como servicio descentralizado en sustitución de la Dirección Nacional de Correos. El artículo 746 de la ley antes mencionada prevé la separación de competencias entre un organismo regulador de todos los servicios postales, y la ANC.
- b. En lo que respecta a telecomunicaciones, la Ley de Presupuesto Quinquenal 2000-2004 propone modificaciones sustanciales en la Carta Orgánica de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (ANTEL) permitiéndole: (i) mantener el monopolio para la telefonía básica en los servicios locales y de larga distancia nacional; (ii) entrar en los restantes servicios y en otros nuevos, mediante la creación de nuevas empresas bajo derecho privado; y (iii) participar en sociedades de capital privado radicadas en el país o en el exterior.

2.8 Para poder consolidar este proceso, es necesario que Uruguay fortalezca el marco normativo e institucional del sector comunicaciones. Este proyecto apunta a consolidar la apertura del mercado de las comunicaciones que se viene instrumentando a través de la modernización del marco normativo sectorial, y el fortalecimiento de la entidad reguladora del sector, la URSEC.

C. Energía y otros servicios de interés público

1. Energía Eléctrica

2.9 En los últimos años, el sector eléctrico en Uruguay se ha visto envuelto en un importante proceso de reforma. En 1997 se aprobó la ley 16.832 que reemplaza algunos artículos de la antigua Ley Nacional de Electricidad del año 1977 y que constituye la base del actual marco legal del sector. Este nuevo marco regulatorio establece que: (i) corresponde al Poder Ejecutivo la formulación y contralor de la política en materia de energía eléctrica; (ii) la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE) es la responsable de controlar el cumplimiento de la ley, dictar normas, asesorar al Poder Ejecutivo, etc.; (iii) la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) operará el Despacho Nacional de Cargas; (iv) se crea el mercado mayorista de energía eléctrica que funcionará en las etapas de

generación y consumo; (v) serán agentes del mercado los generadores, transmisores, distribuidores y grandes usuarios; (vi) la generación deja de tener carácter de servicio público y pasa a ser una actividad libre; (vii) los transmisores y distribuidores están obligados a permitir el acceso no discriminado de terceros a la capacidad disponible de transporte de energía eléctrica; y (viii) es posible realizar exportaciones e importaciones de energía eléctrica, sujeto a autorización del Poder Ejecutivo.

- 2.10 De esta manera el nuevo marco legal establece la apertura total a la inversión privada en el segmento de la generación, determina la creación de un mercado mayorista competitivo al nivel de generación de energía eléctrica, en el cual participarán generadores, distribuidores y grandes consumidores, y establece el libre acceso de terceros a las redes de transmisión y distribución, en la medida que éstas dispongan de capacidad, y previo pago por la remuneración del servicio.
- 2.11 Entre los principales desafíos del sector se encuentra la expansión futura del sistema de generación. Dicho sistema se basará fundamentalmente en centrales térmicas, máxime teniendo en cuenta que se han explotado todas las oportunidades de generación hidráulica factibles económicamente en las condiciones actuales. Las próximas centrales tendrán como principal insumo el gas natural, que ya se encuentra disponible en el litoral del país y próximamente lo estará en el sur. Otro desafío para abastecer la demanda en el futuro es incrementar los intercambios regionales de electricidad con los países de la región. En particular con Argentina, se posee un sistema de interconexión que supera a la carga máxima de la demanda actual. Con respecto a los intercambios con Brasil, está en proceso de ejecución de obra la interconexión Rivera-Livramento, con capacidad de 70MW, y se están realizando estudios para llevar a cabo la concreción de líneas de extra alta tensión que permitan una interconexión de gran porte (250-500 MW) entre el sistema Uruguayo y el sur de Brasil (asociado a la construcción de una central térmica en el litoral).
- 2.12 Los principales objetivos de la política sectorial del gobierno son: (i) abastecer la demanda de energía eléctrica al mínimo costo para el país, en un marco de factibilidad ambiental y de viabilidad financiera de los proyectos destinados a satisfacerla; (ii) concretar la integración del mercado eléctrico Uruguayo con los mercados de los otros países que constituyen el Mercosur; (iii) promover la libre competencia en la actividad de generación de energía eléctrica; (iv) promover el libre acceso de los generadores a todas las instalaciones de transporte de energía eléctrica, en condiciones de igualdad y no-discriminación, con las únicas limitaciones que señale el marco legal; (v) proteger los derechos de los usuarios y de los agentes económicos, impidiendo prácticas monopólicas y competencia desleal, asegurando las condiciones de calidad y seguridad del servicio, y regulando los precios de las actividades en que no exista competencia; (vi) reflejar en los precios que deban regularse los costos económicos de los servicios prestados, de forma tal que se promueva el uso racional y eficiente de los recursos; (vii) promover la participación privada en los nuevos emprendimientos del sector eléctrico; (viii) considerar la participación del sector energía del Uruguay en el Mercosur; (ix) separar las funciones empresariales de las normativas y de las reguladoras; y (x) propender a que los proyectos, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento eléctrico se realicen de modo de proteger la integridad de las personas y

de los bienes, y de preservar el medio ambiente, de conformidad con la legislación específica.

- 2.13 Para alcanzar estos objetivos, es necesario avanzar en el establecimiento del nuevo esquema institucional y regulatorio para crear las condiciones necesarias para el éxito de la reforma. Algunas de las tareas pendientes, son la reglamentación del marco legal, incluyendo la aprobación de los reglamentos del mercado mayorista, de transmisión y distribución y sus disposiciones complementarias, la puesta en funcionamiento pleno de las nuevas instituciones previstas en la ley, y la integración de la UREE a la nueva URSIP.

2. Gas

- 2.14 La industria del gas también se ha ido transformando durante la última década, fundamentalmente a través de la adjudicación de nuevos contratos de concesión en el sector consecuencia de la disponibilidad de gas natural proveniente de la región. El marco legal de la industria del gas se basa en un conjunto de decretos y en tres contratos de concesión: (i) concesión de la distribución de gas en Montevideo, la cual data de 1994, (ii) concesión del transporte a través del gasoducto Cruz del Sur (Buenos Aires–Montevideo), cuya ejecución está próxima a comenzar y (iii) concesión de la distribución de gas en el interior del país (la red ha comenzado a ser desarrollada en el departamento de Paysandú, lugar de llegada del Gasoducto del Norte el cual es propiedad de ANCAP).
- 2.15 El marco institucional del sector ha quedado primariamente definido a partir de los respectivos contratos de concesión y decretos, que establecen: (i) la existencia de un Organismo Técnico de Contralor (OTC), en la órbita del MIEM, cuyo objetivo es controlar el cumplimiento de los contratos de concesión; y (ii) creación de la Unidad Reguladora del Gas (URGAS) dependiente del Poder Ejecutivo a través de la OPP. No obstante la URGAS a la fecha aún no ha entrado en funcionamiento.
- 2.16 Entre los hechos que catalizaron el proceso de introducción de Gas en la matriz energética del país se destacan los siguientes. En 1996, los Gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron acuerdos estableciendo que los usuarios uruguayos del gas recibirán el mismo trato que los consumidores argentinos de igual categoría, es decir, que no serán objeto de ninguna discriminación en cuanto al acceso a las redes de gas de Argentina. Bajo este marco se construyó un gasoducto que unió en 1999 la Provincia de Entre Ríos (Argentina) y el Departamento de Paysandú (Uruguay), permitiendo el transporte de más de dos millones de metros cúbicos diarios de gas hasta Uruguay. Mediante el acuerdo pactado entre las empresas UTE, ANCAP y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, dichas empresas dispondrán de 500.000m³/día de capacidad firme y 250.000m³/día de capacidad interrumpible, sin cargo alguno.
- 2.17 También, sobre la base de lo establecido en los acuerdos firmados entre los gobiernos de ambos países de 1991 y 1996, se llamó a licitación la construcción y operación de un gasoducto en el sur, uniendo las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. El proyecto fue otorgado en concesión a un consorcio de empresa liderado por *British Gas*. La construcción se iniciará en el primer trimestre de 2001 y se completaría en un plazo

máximo de 450 días. La capacidad será suficiente para el abastecimiento a los sectores residencial e industrial y del parque térmico existente en el área de influencia de su traza, y previsiones para futuras ampliaciones de su capacidad de transporte. ANCAP ha manifestado disposición a reservar una capacidad de transporte de 1.500.000 m³/día (un millón y medio de metros cúbicos diarios) y UTE 500.000 m³/día.

- 2.18 Asociado a la incorporación de este gas natural, se encara la construcción y explotación de redes para distribuir gas por cañería en las principales ciudades del país. Este proyecto fue concesionado a un consorcio liderado por Unión Fenosa, que prevé la conexión de aproximadamente 700.000 clientes habiéndose iniciado las conexiones a hogares en el litoral del país (Paysandu y alrededores), zona que recibió ya desde 1998 el suministro de gas natural a través del gasoducto proveniente de Entre Ríos y que desde esa fecha lo utiliza con destino industrial. Por otra parte, la distribución por gas de cañería en Montevideo esta concesionada desde hace varios años al Grupo Gaz de France.
- 2.19 Las prioridades en este sector están centradas en: (i) ordenamiento de la regulación existente con el objeto de aprobar el marco regulatorio con rango legal, (ii) control de la ejecución de las obras proyectadas, de acuerdo a los contratos, y la aplicación de medidas para evitar o corregir posibles desvíos; (iii) la inserción de la URGAS en la nueva URSIP, (iv) fortalecimiento de la regulación de la prestación del servicio (control de calidad y determinación de tarifas técnicas) por parte de esta agencia.

3. Combustibles Líquidos

- 2.20 El sector de combustibles líquidos no ha sido parte del proceso de reforma que sí ha afectado a los sectores de electricidad y gas. El marco legal esta dado por la Ley N° 8.764 de 15 de diciembre de 1931 y la Ley de Hidrocarburos del año 1974 y en la práctica todas la funciones están en manos de ANCAP, la cual a su vez tienen el monopolio en importación y refinación. Si bien durante la administración pasada se desarrolló un estudio sobre el marco regulatorio del sector hidrocarburos, el marco normativo de los combustibles líquidos no ha sido aún objeto de cambios. El gobierno actual se ha fijado como meta la paulatina liberalización del sector y la asunción de las funciones reguladoras por organismos independientes de las entidades que desarrollan actividades empresariales en el sector. Este aspecto está previsto en las funciones que asumiría la nueva URSIP.
- 2.21 Cabe destacar que el FOMIN ha sido instrumental en los cambios que se han dado recientemente en el sector energético. A través de la Asistencia técnica ATN/MT-5276-UR, “Programa para la reforma del sector energético” se están realizando, distintas actividades tendientes a contribuir a la creación de condiciones favorables para la participación de la inversión privada en el sector energético. Como parte de dicho programa se realizó un estudio del marco regulatorio del sector hidrocarburos, y para el sector de energía eléctrica, se realizó el diseño institucional de la UREE y la ADME. Actualmente se están realizando los llamados para los estudios de consultoría referidos al desarrollo del marco legal de la industria del gas, el marco regulatorio de la importación y transporte de gas natural, y el cálculo del valor agregado de la distribución estándar de gas (VADEG) correspondiente al servicio de distribución de gas por cañerías en el área

metropolitana de Montevideo y resto del departamento. Además está prevista la implementación de un sistema de información a través de Internet para el sector energético, que permitirá el acceso a la misma de todos los agentes del sector. La CT propuesta pretende tomar como base lo realizado en el programa anterior avanzando en los puntos necesarios (que se describen en la sección IV) para la consolidación de la reforma en el sector energético.

4. Agua potable y saneamiento

- 2.22 La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), Servicio Descentralizado creado el 19 de diciembre de 1952 con jurisdicción nacional, presta los servicios de agua potable y saneamiento en todo el país incluyendo áreas urbanas y rurales con la única excepción del saneamiento en el Departamento de Montevideo. Actualmente OSE suministra el servicio de agua potable a Montevideo y 324 localidades del Interior del país, así como servicios de alcantarillado sanitario en 42. La legislación actual posibilita que la OSE, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo, conceda servicios en concesión de acuerdo con lo dispuesto por el art. 750 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996. La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), responsable por el servicio de saneamiento del Departamento de Montevideo. Por otra parte, las Intendencias Municipales (IM), tienen competencia en la disposición de excretas individuales, como fosos sépticos, pozos negros, pozos absorbentes, etc.
- 2.23 Actualmente existen dos operadores privados, Aguas de la Costa, empresa concesionaria de OSE al este del arroyo Maldonado y Aguas Corrientes del Pinar, empresa que presta el servicio de agua potable en la localidad de El Pinar, actividad que se lleva a cabo ajena a toda regulación estatal.
- 2.24 Si bien el porcentaje de viviendas particulares con abastecimiento de agua por cañería ha mejorado del 74.6% en 1985 al 82.2% en 1996, el mismo presenta diferencias muy fuertes entre Montevideo (92.5%) y el Interior (74.2%) y aún más si se distingue entre el País urbano y el País Rural (85.9% y 43.2% respectivamente). En cuanto al porcentaje de viviendas particulares con sistema de evacuación de excretas, el mismo se sitúa en el 95.6%. Dicho porcentaje se reduce al 49.4% de considerar los sistemas conectados a red general y aumenta al 94.9% de considerar los sistemas conectados a fosas sépticas.
- 2.25 Con respecto a los actores involucrados en el sector, se destaca la multiplicidad de los mismos con funciones superpuestas en muchos casos y no claramente definidas en otros. Adicionalmente, el principal operador, OSE, ha otorgado en concesión los servicios de agua potable y saneamiento en una pequeña área (al este de La Barra del arroyo Maldonado) y se encuentra en pleno proceso de concesión de dichos servicios para el Departamento de Maldonado. Ello plantea problemas de contralor de los servicios por parte de un operador quien se convierte en juez y parte de la competencia.
- 2.26 Consistente con la experiencia reciente de países que han abordado exitosamente programas de reforma del sector, el Gobierno del Uruguay se ha propuesto mejorar su eficiencia técnica a través de la participación del sector privado, estableciendo reglas claras de funcionamiento del mercado e incrementando en forma paralela la salud pública

y el medio ambiente, separación institucional entre las fases de formulación de políticas sectoriales, regulación y operación y prestación; fortalecimiento del proceso de regionalización y descentralización, como sustento de parámetros de gestión para la aplicación de la competencia comparativa; adecuación de normas que rigen al sector, con el objeto de efectuar una correcta asignación de funciones para cada participante y crear las condiciones institucionales para una eficiente participación del sector privado en la prestación de los servicios; y promoción de la calidad y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en todo el territorio de la República en consonancia con una tarifa razonable para clientes y operadores.

III. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

- 3.1 Los beneficiarios del proyecto serán mayoritariamente los usuarios de los servicios definidos de Interés Público en general, que se verán beneficiados por una amplia gama de servicios públicos a un precio más competitivo, facilitando el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la nueva economía. La apertura en los sectores comunicaciones y energía, apoyada por un marco regulatorio e institucional moderno y transparente, permitirá la realización de importantes inversiones en Uruguay que mejorarán la infraestructura, y por lo tanto la competitividad del sector privado uruguayo.

IV. OBJETIVOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

D. Objetivos

- 4.1 El objetivo general del proyecto es contribuir a la creación de las condiciones necesarias para incrementar la inversión privada y la eficiencia en la provisión de servicios de infraestructura. El proyecto busca específicamente contribuir a: (i) la adopción de un marco regulatorio estable y transparente en los sectores de energía, combustibles líquidos, agua potable, saneamiento y comunicaciones, consistente con el proceso de integración del Mercosur; (ii) la reforma institucional para separar la prestación directa del servicio de la función de regulación y de definición de políticas; y (iii) el fortalecimiento de las dos Unidades (una para comunicaciones y la otra para los definidos Servicios de Interés Público) que regirán estos sectores de manera que puedan llevar a cabo su función de regulación y control en forma efectiva, autónoma y eficiente.

E. Componentes y Actividades del Proyecto

- 4.2 En función de la cobertura sectorial y de los arreglos institucionales sectoriales existentes y proyectados, el Programa se dividiría en dos Sub-programas. El primero orientado al sector comunicaciones y el segundo dirigido a los sectores definidos como Servicios de Interés Público. A nivel general, los componentes y el presupuesto, tal cual se definen en esta solicitud serían similares en cada Sub-programa siguiendo la descripción general que se detalla en los siguientes párrafos.

1. Componente 1: Instrumentación del Nuevo Marco Normativo

- 4.3 Este componente del programa buscará apoyar con asistencia técnica a la Unidad Reguladora de los Servicios de Interés Público y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Dicha asistencia facilitaría el desarrollo de la reglamentación de los marcos generales en cada uno de los sectores, los reglamentos específicos de los servicios, las modalidades de prestación, y el detalle de los reglamentos, procedimientos y normas a aplicar por las unidades reguladoras.

2. Componente 2. Fortalecimiento de las Unidades Reguladoras de Servicios de Interés Público (URSIP) y Comunicaciones (URSEC)

- 4.4 Este segundo componente contiene todas las actividades necesarias para la transición institucional de las competencias que se transferirían a estas unidades y el fortalecimiento de su gestión, para que se puedan llevar adelante las mismas en forma efectiva y eficiente. En un entorno competitivo, estos dos órganos reguladores, en sus respectivos sectores de influencia, desempeñarán un papel crucial. La consolidación de la presencia de la URSIP y URSEC como órganos autónomos contribuirá de manera importante al fomento de la competencia y al desarrollo de los sectores involucrados. Además, un marco normativo transparente y creíble proporcionaría más incentivos a inversionistas actuales y potenciales en los distintos sectores. En tal sentido, los principales sub-componentes serían los que se detallan a continuación.
- 4.5 **Estructura Orgánica, Procedimientos y Formulación del Presupuesto de Operaciones.** Las actividades principales constituirían la determinación de las necesidades y el perfil de recursos humanos, los términos de referencia de cada cargo, la estructura salarial, y los procedimientos de operación interna de cada unidad reguladora.
- 4.6 **Capacitación.** Estas unidades requerirán capacitar fuertemente a su personal a través de pasantías en entidades regulatorias similares de la región, y a la vez instrumentar un programa de cursos formales. Los temas principales a abordarse en cada sector serían: (i) regulación económica de los servicios; (ii) regulación de las concesiones de operación en sus sectores; (iii) monitoreo de la operación de los servicios; (iv) resolución de conflictos; y (v) seguimiento de los compromisos contractuales de las concesiones de servicios.
- 4.7 **Servicios de Información.** En este sub-componente se diseñará e implementará el sistema de documentación e informática que requiere cada sector para sus operaciones. Además, se prevé la adquisición de equipos y programas necesarios para la administración de los servicios. Con miras a maximizar la transparencia en la gestión, se instrumentaría un servicio de información al público y resolución de consultas y reclamos a través de Internet. En este sentido se difundiría: (i) divulgación de las intenciones y pautas para la concesión de servicios; (ii) legislación y normativa que rige cada sector; (iii) gestión estadística y evaluación, permitiendo acceder a la información de cada uno de los mercados de los servicios; (iv) precios de venta y su evolución y tendencias para cada uno de los servicios; (v) acceso a fallos sobre adjudicaciones de concesiones; y (vi) situación de trámites y expedientes sobre disputas y reclamos por servicios.

- 4.8 **Sistema Tarifario.** En esta actividad se incorporará el desarrollo de los marcos tarifarios sectoriales y los procedimientos para determinar las tarifas de cada uno de los servicios en que la prestación se hace en presencia de imperfecciones de mercado. Asimismo se determinará el método de fijación de tarifas y se desarrollarán los programas para simular y evaluar esquemas tarifarios alternativos.
- 4.9 **Creación y Fortalecimiento de las Sistemas de Control.** Este sub componente apunta a fortalecer la capacidad técnica y funcional para hacer cumplir en forma efectiva el nuevo marco normativo en cada sector. La ejecución de este componente se efectuará con la instancia institucional correspondiente a cada sector.

V. COSTO, FINANCIAMIENTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

- 5.1 El costo total del Programa sería de aproximadamente US\$ 2.000.000, para lo cual el FOMIN aportaría US\$1.200.000, con una asignación similar para cada uno de los sub programas. Aunque este monto es aún tentativo, se estima que la contribución del FOMIN estará orientada fundamentalmente a: (i) consultorías especializadas para propuestas técnicas para instrumentar el nuevo marco legal que rige a la prestación de los servicios en las sectores energía, agua potable, saneamiento, combustibles líquidos y comunicaciones; (ii) consultorías para apoyar el montaje del sistema informático de la URSIP y de la URSEC, incluyendo el desarrollo de los respectivos portales en Internet; (iii) capacitación de los recursos humanos; y (iv) desarrollo de normativas y procedimientos sectoriales para la operatoria sectorial. El tiempo de ejecución del programa se estima en aproximadamente 24 meses.

VI. ORGANISMO EJECUTOR

- 6.1 El proyecto tendrá dos ejecutores: la URSIP y la URSEC. No obstante, mientras no estén creadas las mencionadas unidades será ejecutado transitoriamente por la O.P.P.

VII. RESULTADOS PREVISTOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 7.1 En el corto plazo, el programa permitirá completar el marco regulatorio para la provisión de servicios públicos, definiendo los reglamentos específicos para los distintos servicios, y los procedimientos y normas a aplicar por las unidades reguladoras. Además, el programa permitirá fortalecer a dichas instituciones para que puedan llevar a cabo su funciones en forma efectiva, autónoma, y eficiente. En el mediano y largo plazo, el programa contribuirá a crear un marco legal e institucional flexible y transparente que permitirá incrementar la inversión privada y la eficiencia en la provisión de servicios de infraestructura.

- 7.2 Cabe destacar que el programa aquí propuesto se complementa con las acciones en curso del Programa de Modernización de la Gestión Pública mediante el cual se ha enfatizado la necesidad de que el Estado se enfoque a tareas de regulación y formulación de políticas, dejando cada vez más la producción de bienes y servicios a cargo de empresas privadas y de la sociedad civil, incluyendo un proceso cada vez más importante de tercerización de tareas. Estas innovaciones y la presión por una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión, determinan la necesidad de contar con un marco institucional y regulatorio de los servicios básicos acorde a los requerimientos de una institucionalidad pública más moderna. En síntesis, el nuevo sistema regulatorio y normativo de los servicios permitiría facilitar la inversión de montos importantes en proporción al PBI en infraestructura y servicios básicos; la modernización e incorporación de nuevas tecnologías; el acceso de los mismos por parte de la ciudadanía y las empresas; y el impulso de la competitividad del sector privado uruguayo a través de una reducción en los costos de operación.
- 7.3 Además, la operación solicitada es complementaria con los esfuerzos iniciados años atrás con el apoyo del FOMIN, que permitieron avanzar en la concesión del Gasoducto del Sur, así como en la reestructuración del sector energía. De hecho con el saldo final de la ATN/MT-5276-UR, se estarían realizando en lo que resta del año los estudios de consultoría referidos al desarrollo del marco legal de la industria del gas, del marco regulatorio de la importación y transporte de gas natural, y del cálculo del valor agregado de la distribución estándar de gas (VADEG) correspondiente al servicio de distribución de gas por cañerías en el área metropolitana de Montevideo y resto del departamento.
- 7.4 Cabe señalar, que en lo referente a comunicaciones, la intervención es coincidente con otros esfuerzos apoyados por el Gobierno y el Banco, tal como el Programa de Desarrollo Tecnológico II (UR-0110), así como los proyectos del FOMIN que impulsarían Incubadoras de Empresas (ORT/LATU) y de desarrollo del sector software (CUS). Por ultimo, cabe señalar que Uruguay cuenta con un pujante sector de PYMEs dedicadas al desarrollo de soluciones de software (ej. exporta más software que países como Brasil), el cual se vería potenciado por la disponibilidad de un mercado de comunicaciones moderno y eficiente.

VIII. TEMAS PRINCIPALES

- 8.1 Los temas relevantes a tomarse en cuenta durante la preparación del proyecto son: (i) determinar las necesidades de nuevas regulaciones para poder instrumentar el marco legal; (ii) colaborar en el proceso de implementación funcional de las dos unidades reguladoras autónomas de las instancias existentes en la actualidad con responsabilidades normativas y de supervisión de los sectores; y (iii) avanzar en la definición de los componentes y en su dimensionamiento presupuestario, así como determinar las fuentes de los aportes de contrapartida.

IX. RECOMENDACIONES DE LA REPRESENTACIÓN

- 9.1 Se recomienda procesar la operación en el plazo más breve posible ya que el mensaje complementario al proyecto de ley que crea las nuevas unidades reguladoras sería enviado al Parlamento durante el transcurso del mes de noviembre. Se propone un período de 24 meses de ejecución y de 28 meses para los desembolsos.

X. TIEMPO ESTIMADO DE PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO

- 10.1 Se estima que, a partir de la aprobación del presente, se podrá completar el análisis en cuatro meses.